



Este artículo es una publicación de la Corporación Viva la Ciudadanía
Opiniones sobre este artículo escribanos a:

semanariovirtual@viva.org.co

www.viva.org.co

Piero y los indígenas del Cauca, cantan por la Paz de Colombia

Maureén Maya
Periodista e investigadora social

El presidente Juan Manuel Santos generó enorme expectativa en el país, cuando en días pasados admitió públicamente que los rumores acerca de unas conversaciones exploratorias que su gobierno estaría adelantando con la guerrilla de las FARC desde el mes de febrero en La Habana, Cuba para dar inicio a un definitivo diálogo de paz, eran verdaderos.

El anuncio se produjo en un ambiente bastante confuso, pues mientras los reportes regionales, especialmente en el Cauca, evidenciaban el recrudecimiento del conflicto, el incremento de combates y hostigamientos en los municipios de Timbiquí, Caloto, Toribío, Santander de Quilichao y Corinto, entre otros, la descontrolada acción criminal de las nuevas estructuras paramilitares que, en connivencia con la fuerza pública, seguían amenazando y atentando contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, más el asesinato de por lo menos una veintena de indígenas, la ejecución del médico tradicional y guía espiritual del pueblo Nasa, Lisandro Tenorio de 74 años de edad a manos de las FARC, y el desarrollo de públicas manifestaciones de discriminación racial en Popayán; al mismo tiempo las autoridades tradicionales indígenas del Cauca se declaraban en Asamblea Permanente, llamaban a la minga de resistencia y decidían por su propios medios expulsar a los armados de sus territorios sagrados, mientras en algunos sectores de la sociedad civil se empezaban a articular propuestas con el fin de proponer alternativas viables capaces de ponerle fin a la guerra y despejar el camino hacia una paz posible, firme y duradera en Colombia.

En esta coyuntura, en la cual empiezan a soplar vientos de esperanza y a la vez se registran escenas de violencia y de dolor que reflejan la tragedia humanitaria que padece el pueblo colombiano, los costos humanos y sociales de la guerra y sus horrores en medio de un hastío generalizado, surge una propuesta que, de consolidarse tal como se ha planteado, podría surtir un efecto altamente positivo en el recién iniciado proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla.

En el mes de julio, el cantante argentino, nacionalizado en Colombia, Piero, envió un mensaje de solidaridad a los pueblos indígenas del Cauca (adjunto al final de este texto), en el que además de ofrecer sus buenos oficios para aportar a la construcción de caminos que conduzcan a la paz y la reconciliación en Colombia, convoca la voluntad y participación de otros ciudadanos de

América Latina. A partir de este comunicado, las Autoridades tradicionales indígenas del Cauca, a través del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, decidieron establecer una alianza de cooperación con Piero para diseñar y lanzar el MANIFIESTO POR LA PAZ DE COLOMBIA: UN MANDATO CONTINENTAL en dos eventos musicales; uno en Bogotá y otro en Popayán.

En el primer concierto, que se realizará el próximo 8 de septiembre en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá con la participación de Piero y su banda, dos grupos de la Guardia Indígena y la cantautora colombiana Andrea Echeverri, se hará el lanzamiento oficial del Manifiesto por la Paz, el cual recoge las expresiones, propuestas y voces de diversos sectores sociales del país. Se prevé que el acto de instalación esté a cargo del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y que representantes de organizaciones campesinas, movimientos sociales y de víctimas, estudiantes, mujeres, población afro, indígenas, defensores de derechos humanos, artistas, académicos, escritores e intelectuales, lean cada uno un fragmento de este Manifiesto. Al final se realizará un acto simbólico y un ritual sagrado para blindar el proceso de paz, protegerlo de las mañas energías y limpiar el camino que deberá emprender para su realización.

El sentido del Manifiesto es, por un lado, convocar la solidaridad y el apoyo internacional para que figuras representativas del continente se adhieran a éste y aporten ideas e iniciativas para el desarrollo de un acuerdo de paz en el que esté representada la sociedad civil, logrando que juegue un papel activo en el desarrollo de las conversaciones. Asimismo, este documento servirá como insumo para la instalación de unas Mesas de Diálogo de la Sociedad Civil, a través de las cuales se construirá una agenda temática sobre aspectos sociales y políticos, que deberán ser considerados en los acuerdos de paz que suscriban el gobierno y las guerrillas de las FARC y ELN.

Dentro del programa de lanzamiento del Manifiesto por la Paz, se realizará un concierto en la Plaza de la Salud de Popayán, para lo cual se cuenta con el firme compromiso y respaldo del gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, quien públicamente ha expresado su disposición para que en este departamento se inicien los diálogos de paz.

Siendo el departamento del Cauca, una de las regiones más golpeadas por la violencia, el conflicto armado, la inequidad y dónde se han producido graves hechos de violencia, infracciones al DIH, violaciones a los Derechos Humanos, en un contexto social marcado por la discriminación racial, el feudalismo, la estigmatización política, los recortes a la inversión social y el abandono estatal, resulta de enorme significado emprender allí una campaña continental por la paz de Colombia, exaltando la organización, el trabajo comunitario y la ejemplar resistencia de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes que, con ejemplar valor y coherencia han desafiado la violencia y la marginalidad dando muestras de dignidad y de una clara vocación de paz. Los pueblos indígenas del Cauca, se han convertido en símbolo de paz y resistencia tanto para Colombia como para el mundo.

Los recientes, pero no nuevos, hechos de violencia registrados en este departamento, donde se expone sin ambages la crudeza del conflicto, pero también la fuerza, coherencia y resistencia de los pueblos indígenas, nos indican que, efectivamente, en este contexto de violencia, precariedad y discriminación pero también de legítimos esfuerzos en defensa del territorio, la soberanía, lo sacro y la vida, podría germinar una auténtica semilla de paz para Colombia. De allí la importancia de que en Santander de Quilichao se haya programado para el próximo 15 de septiembre, un encuentro multicultural para que niños de los pueblos indígenas del Cauca, de las comunidades afros y campesinos realicen un intercambio de canciones y saberes con Piero, quien les ofrecerá la Sinfonía Inconclusa en el Mar, y aprenderá cantos autóctonos de esta región.

Entre otras actividades previstas, en el marco de la Semana por la Paz, que impulsa Redepaz, se tiene previsto realizar un evento especial el 11 de septiembre de 2012, en la escuela distrital de Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar, para que Piero y los niños en medio de una cabalgata por la paz con caballitos de madera, construidos por los mismos los niños, interpreten de manera conjunta la Sinfonía Inconclusa en el Mar.

El proyecto del Manifiesto por la Paz en Colombia ha sido respaldado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Gobierno, la dirección de Derechos Humanos, la Secretaría de Integración Social, y de manera especial y comprometida, por la Alta Consejera para las Víctimas, Ana Teresa Bernal, quien de manera entusiasta se ha unido a esta campaña convocando la presencia de otras entidades del Distrito y aportando de manera generosa sus esfuerzos y tiempo para la realización de los eventos. Igualmente, la Asociación Minga, Redepaz, la Corporación Viva La Ciudadanía, FOS de Colombia y el PNUD han respaldado este proyecto. La Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, a cargo de Moisés Medrano ha expresado su buena disposición para contribuir a su exitosa realización.

El Manifiesto de la Paz, que podría convertirse en invaluable aporte al proceso de paz en Colombia, resulta altamente significativo en el sentido de que a través de su ejecución se pretende despertar la conciencia ciudadana sobre el deber que a todos nos asiste de vencer nuestra propia precariedad moral, abrazar y dignificar a las víctimas de esta historia de violencia y aportar, con mística y convicción, a la solución de un largo y costoso conflicto armado que, después de tantas décadas de oprobios, derrotas, pérdidas y daños irreparables ha frenado el desarrollo social del país, lo ha fragmentado y lo ha postrado a la acción criminal de quienes se han configurado en detentores del poder político y amos de la guerra.

De la alocución presidencial, en la cual Santos afirmó que en este nuevo proceso era necesario "aprender de los errores del pasado para no repetirlos" y que cualquier negociación debería llevar al fin del conflicto aunque se mantengan las operaciones militares en todo el territorio nacional, surgió también la reflexión sobre los errores del pasado cometidos por la sociedad civil, tanto por haberse marginado de los procesos, como por haber asistido impávida al genocidio contra la UP, desatado tras la firma de los acuerdos de

paz de la Uribe, Meta en 1984. De modo que la iniciativa de lanzar públicamente el **Manifiesto por la Paz en Colombia: un mandato continental**, para convocar la buena voluntad y el compromiso político de la sociedad y de los actores del conflicto a fin de generar las condiciones necesarias para la instalación de mesas de diálogo de la sociedad civil, busca también que las figuras más representativas en el mundo del arte, las letras, la intelectualidad y la defensa de los derechos humanos en América latina acompañen y blinden el recién iniciado proceso de paz, lo fortalezcan con propuestas viables y generen una real incidencia política en las agendas de sus gobiernos, asumiendo que el problema de la guerra en Colombia afecta también a otras naciones.

La voluntad de paz expresada por los pueblos indígenas, por al presidente de la República, por las organizaciones sociales y por significativos sectores de la sociedad, sumado a la buena disposición expresada por el gobernador, Temístocles Ortega Narváez, indican que estamos ante una oportunidad histórica para reafirmar esa voluntad y lograr que, con la activa participación de la ciudadanía, se suscriba un Pacto Social por la paz de Colombia.

La PAZ es un pacto social amplio, incluyente, democrático donde se expresa el pluralismo y la diversidad cultural de una nación. Es una conquista social que exige de la activa participación de todos los ciudadanos, donde cada cual pueda asumirse como sujeto de derecho y agente histórico de transformación de su sociedad.

Propender por un genuino desarrollo humano sostenible, donde el hombre, el medio ambiente y la justicia social sean los ejes de toda acción política, conduce, inexorablemente, a replantearnos la realidad de la guerra y a asumir el deber moral y social de aportar a la construcción de una nación en paz donde la armonía y la reconciliación nos permitan avanzar hacia un real Estado Social y Democrático de Derecho.

La paz se nutre de la conciencia social, de la justicia, del reconocimiento a la dignidad de las víctimas y de todos los seres humanos, del respeto a los derechos individuales y colectivos, de la participación ciudadana y de la elaboración de un duelo colectivo donde se reconstruya la verdad dolorosa del pasado y se asuma el deber ético de no permitir que los horrores del pasado vuelvan a repetirse jamás evitando, además, que queden condenados al olvido y la impunidad.

La paz la pactan los guerreros, pero la construyen las sociedades que se reconcilian con su historia y con su pasado; que deciden aportar a la construcción de una nación próspera, con justicia y equidad, y donde cada cual logre alcanzar plenamente su desarrollo humano, social, político material y espiritual. Por ello la paz no puede ser asumida como un decreto o un proceso de negociación ajeno a la realidad de los ciudadanos, suscrito a puerta cerrada por el Estado con las fuerzas insurgentes que se alistan a deponer las armas.

El Encuentro Exploratorio que se inició en febrero de 2012, entre Gobierno y guerrilla en La Habana, Cuba, con la participación del Gobierno de ese país y

del Gobierno de Noruega como garantes, y con el apoyo del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como facilitador de logística y acompañante, llevó a que se definieran unos acuerdos base, las reglas de funcionamiento y una agenda temática de seis puntos, entre los que se incluye: Política de desarrollo agrario integral (acceso y uso de la tierra, formalización de la propiedad, programas de desarrollo con enfoque territorial, desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza y estímulo a la producción agropecuaria); Participación política (Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final, acceso a medios de comunicación, mecanismos democráticos de participación ciudadana, y medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad); Fin del conflicto (Cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivas, dejación de las armas y reincorporación de las FARC-EP con garantías de seguridad); Solución al problema de las drogas ilícitas; Víctimas e Implementación, verificación y refrendación de todos los puntos acordados.

Uno de los avances más significativos de esta agenda es que tácitamente reconoce que al ser el gobierno parte del conflicto no podría ser a la vez arbitro en las negociaciones, lo que obliga a convocar la mediación de un país extranjero que garantice la permanencia en la mesa de los actores negociadores, aún sobre las provocaciones y las acciones de guerra que seguirán presentes mientras se avanza en la implementación de la mesa de concertación.

De otra parte, llevar a la mesa de diálogo, el tema del narcotráfico, es un avance fundamental de enorme coraje, pues si se reconoce que este fenómeno no sólo se ha convertido en insumo para la guerra, sino que además, ha pervertido y degenerado los poderes del Estado, fracturado los procesos democráticos y generado una grave distorsión social y cultural en buena parte de la sociedad colombiana, a través de la imposición de modelos frívolos que desprecian la diferencia, el trabajo y el deber ético de defender y garantizar la vida, es sencillo entender que su reconocimiento como un problema que debe ser erradicado, contando con el debido apoyo internacional, podría generar diversas reacciones y fuertes maquinaciones al interior de los poderes políticos.

Ahora, si bien la agenda propuesta por el Gobierno nacional se constituye en un importante avance, y existe la voluntad de impulsar un diálogo hasta el final, aprendiendo de los errores del pasado, asimismo, se debe entender que hoy no es posible hablar de un proceso de paz realista que no cuente con la comprometida y decidida participación de la sociedad civil.

La guerra continuará por ahora, nuevos hechos de violencia, falsos atentados, intentos por sabotear el proceso por parte de esa extrema derecha péfida, arrogante y criminal que encarna el ex presidente Uribe y sus esbirros, seguirán presentándose en todo el país; pero ante ello, además de la imperiosa necesidad de que el Estado cumpla con su deber, sin más dilaciones, de desarticular por completo las bandas narcoparamilitares que siguen sembrando

de muerte y terror la geografía colombiana, será fundamental contar con el respaldo y la presión de una sociedad que exige, necesita y merece vivir en paz. La sociedad sea quizás, llegado el momento, la única fuerza que logre evitar que las partes negociantes claudiquen en su intento, cedan a sus propias contradicciones y terminen por desechar esta nueva oportunidad histórica que se abre para lograr que una paz cierta sea posible en el país.

Sólo la vocación de paz de las mayorías y su activo compromiso, podrán hacer que la Paz en Colombia no sea una utopía, ni un asunto marginal sin proyección social ni una muletilla electoral, sino que sea, en efecto, una realidad inevitable para todos.

Adjunto Carta de Piero

Buenos Aires, julio de 2012

A mis amados paisanos

La paz en Colombia no da espera; alcanzarla se constituye en un imperativo, tanto nacional como regional, que no admite más titubeos ni dilaciones.

Colombia, uno de los países más ricos y diversos del continente, continúa inmersa en un conflicto armado de profundas raíces sociales, económicas y políticas. Esta guerra, que ha costado la vida de millares de seres humanos, la integridad de miles de familias, la destrucción de buena parte de su riqueza natural y ha frenado genuinas opciones de desarrollo en las que el hombre y sus derechos sean eje central de toda política de progreso, debe ser superada a través del diálogo y la concertación nacional. Es vital contar con la activa participación y el compromiso de toda una sociedad que clama y exige vivir en paz.

Los estremecedores y recientes acontecimientos del Cauca, donde se expresa sin ambages la voluntad de paz de los pueblos indígenas, y su justo reclamo en defensa de la autonomía, el territorio y su derecho a vivir en paz, se extiende más allá de los límites de sus territorios ancestrales y sacuden la conciencia continental. La Minga de resistencia por la autonomía y la armonía territorial y por el inmediato cese de la guerra, convocada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), es un clamor urgente y desesperado que ni gobiernos ni ciudadanos del mundo pueden ignorar.

Como ciudadano colombiano, reafirmo mi firme compromiso de trabajar por la pacificación de Colombia; por lograr que mediante acuerdos y salidas políticas se supere la violencia, la marginalidad, los odios, la injusticia social y el oprobioso trato que durante siglos han recibido las llamadas “minorías étnicas” de Colombia. La paz es una conquista social, amplia, incluyente y participativa; y así mismo es un imperativo fundamental para forjar una nación de bienestar y progreso para todos.

La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento como lo establece el artículo 22 de la Carta Política de Colombia. El derecho a la paz significa

respeto a la vida y a la diversidad; vivir en armonía con el medio ambiente y con los demás seres vivos y garantizar el pleno derecho de todo ser humano a una vida digna, amable y productiva con reales opciones de felicidad y plenitud.

Es deber de todo Estado y de todo ciudadano que anhele vivir en paz, actuar en defensa de la dignidad humana, superar toda forma de discriminación, segregación y exclusión social, política o racial; propender por una genuina cultura de paz; asumir, en defensa de la vida una clara posición anti-armamentista y anti-belicista y rechazar todo acto de violencia y crueldad que lacere la conciencia de la humanidad. La promoción, defensa y respeto de los Derechos Humanos y de los principios consagrados en el Derecho Internacional Humanitario, no tienen color político; son fundamentos esenciales para vencer la guerra y sentar las bases de una sociedad plural que se reconoce en el otro y que es capaz de dirimir las diferencias a partir del diálogo, la argumentación sensata y el respeto mutuo.

A través del derecho a la paz se defiende la dignidad del ser humano y su libertad.

Hastiado, al igual que muchos de mis compatriotas, de padecer una Colombia en guerra, y consciente de los enormes costos que ésta demanda a la sociedad, deseo aportar mis modestos y más sinceros esfuerzos para avanzar en la construcción de un camino que nos acerque como hermanos y nos permita avanzar con paso decidido hacia una paz firme y duradera.

Con profundo respeto, me uno al clamor del CRIC y apoyado, también, en sus bastones de mando y en su sabiduría ancestral, digo como dijeron los indígenas del Cauca, hace 40 años: *“Es hora de la paz y no de la guerra. Hora para que desde el Estado, desde la insurgencia y demás grupos armados, no se levanten más las armas contra el pueblo. Que cesen las masacres, los homicidios selectivos, los desplazamientos, las amenazas, las torturas, las desapariciones forzadas, las mutilaciones, los señalamientos, la muerte y la ignominia. Hora de la verdad y de la justicia. Hora de que la riqueza del país sea puesta a favor de la igualdad y la equidad, que el presupuesto nacional sea invertido fundamentalmente en lo social y no en la guerra”*.

Es hora de demostrar el temple de nuestros corazones, la firmeza de nuestras convicciones y el valor de nuestra palabra; es tiempo de dialogar con honestidad y generosidad; de unir voluntades y de anteponer a intereses particulares y pequeñas mezquindades, el bienestar de toda una nación que clama, exige y necesita vivir en PAZ.

Indígenas Y CAMPESINOS somos todos y la PAZ somos nosotros

Fraternalmente,

Piero de Benedictis

Edición N° 00318 – Semana del 31 de Agosto al 6 de Septiembre de 2012